

¿15 años de paz?

Ha pasado, sin pena ni gloria, el decimoquinto aniversario de los Acuerdos de Paz en El Salvador. Se ha gastado dinero, se han repetido los consabidos discursos, se ha dicho por centésima vez que somos un ejemplo para el mundo. La población, entre tanto, en su gran mayoría, no ha sentido que el discurso llegue a sus problemas, ilumine su futuro o transforme algo su historia cotidiana de angustia económica, terror ante la violencia y el delito, o dependencia de la dolorosa migración.

Palpamos a diario los mismos problemas: las extorsiones que se repiten, los homicidios que se acumulan, la indiferencia de las autoridades ante la muerte, el cinismo de quienes justifican los asesinatos diciendo que son las maras las que se matan entre ellas. Desde la historia violenta de la guerra, nada cambia para una parte de nuestra gente. Los pequeños descensos temporales de la violencia dependen más de coyunturas que de una incidencia eficaz en la lucha contra el crimen. Si antes la violencia política superaba a la delincuencia, poniendo al menos finalidades supuestamente éticas en la misma brutalidad, hoy nos encontramos con el auge espectacular de una violencia primitiva, ciega muchas veces, que no ofrece un futuro de paz. Al contrario, es esta una violencia que manifiesta con claridad el reto incumplido de crear un desarrollo económico que conduzca con urgencia hacia un verdadero desarrollo social.

Los homicidios, 55 por cada 100 mil habitantes, son una auténtica plaga. Y ni la investigación policial ni la acción fiscal tienen la capacidad de enfrentarla. El robo, la extorsión y el chantaje se han convertido en un sistema de vida impune. El Fiscal General de la República informaba no hace mucho que solamente el 3% de los delitos llevados ante el juez terminaban con una sentencia condenatoria. Las investigaciones, cuando llegan, llegan demasiado tarde. El enriquecimiento ilícito, la corrupción en altos niveles de las dependencias del Estado, incluso la utilización de dineros públicos en algunos sectores gubernamentales, carecen de controles adecuados. La impunidad tiende a ser la norma tanto en las esferas más bajas del crimen como en los altos niveles de la corrupción.

Las respuestas a la nueva violencia han sido pocas, poco inteligentes y con más interés en su efecto mediático que en la resolución de los problemas. No vamos a repetir aquí las muchas y diversas causas de la violencia,

pero al hablar de la paz en estos quince años, sí hay que resaltar un factor: han sufrido repetidos retrocesos las instituciones fruto de los Acuerdos de Paz. Y el espíritu de éstos (diálogo y concertación) ha sido traicionado todavía con más frecuencia.

El fallo institucional

El Foro de Concertación Económica y Social no tuvo retroceso, simplemente no funcionó. El modelo económico se radicalizó en favor del capital, aumentando su concentración y provocando mayor exclusión. La supresión del Ministerio de Planificación, con el argumento absurdo de que la planificación era un concepto socialista, dejó el mercado en las manos del más fuerte. Los sucesivos pasos de privatización, tratados de libre comercio, dolarización y desnacionalización de la economía siguieron profundizando el modelo sin ningún tipo de diálogo con los sectores más perjudicados del sistema. La verborrea del “vamos bien”, del “ahora sí empieza un nuevo ciclo”, del “ya se vislumbra un despegue consistente y permanente”, se ha ido oponiendo persistentemente a la realidad de una sociedad cada día más desigual y violenta. Sin la inyección de remesas que los emigrantes pobres aportan a nuestra economía, el “sistema” —como gustan denominarlo quienes confunden explotación e injusticia con democracia— hace tiempo que se habría roto. Se da así la paradoja, presente en casi todas las naciones centroamericanas, que quienes fueron expulsados de sus propios lugares por las guerras, la pobreza y la falta de oportunidades, son ahora los que posibilitan que nuestros países puedan ir sobreviviendo en medio de débiles democracias y ligeros avances institucionales, que no logran dar el salto hacia un desarrollo humano consistente.

Si el país sigue en pie es porque la gente siempre es mejor que sus gobiernos y que sus instituciones. Pero los problemas graves de tipo social, cuando son permanentes y no tienen visos de solución pronta, llaman a la desconfianza ciudadana. Y ésta se convierte siempre en fuente de soluciones individuales. Además, el culto sistemático al individualismo en los medios de comunicación, en la propaganda consumista o en la privatización sistemática de bienes comunes, impide cada día más vislumbrar soluciones solidarias. No es así difícil entender el agobio de una buena parte de la ciudadanía, sometida al capricho, impunidad y desorden de soluciones individuales frente a los problemas sociales. Por otra parte, las instituciones en las que debía reposar la confianza colectiva, sea a nivel de salud, educación, o seguridad ciudadana, dejan mucho que desear. E incluso las más características de los Acuerdos de Paz han ido perdiendo eficacia y credibilidad.

Estas instancias, como la Policía Nacional Civil (PNC) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, han sufrido retrocesos graves. La Fuerza Armada y la Fiscalía General de la República, en cuanto instituciones reformadas tras los Acuerdos, han pasado también por crisis o deformaciones. La PNC se ha ido militarizando paulatinamente. En su contra hay denuncias de prácticas características del pasado, como el maltrato o incluso la tortura. La corrupción está incrustada en la institución, aunque no todos los policías sean corruptos. Los propios sistemas administrativos, tanto

de control interno como de manejo de recursos materiales y humanos, son desastrosos. La investigación está en pañales. El florecimiento en número (de entidades y de personal) de las agencias privadas de seguridad, y el auge de la delincuencia señalan la existencia de un primer y rotundo fracaso. Además, la deserción permanente de agentes y mandos intermedios en una institución tan joven muestra un segundo fracaso: el de la incapacidad institucional de retener a su personal ya formado y con experiencia, y mantener la satisfacción y la moral adecuada entre el mismo. Máxime si tenemos en cuenta que en ciertos años el número de los que abandonaron la PNC fue igual o superior a la cantidad de aspirantes que ingresaron a la academia. La instrumentalización política, el maltrato a la población y el irrespeto creciente a los derechos humanos completan el panorama.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, si bien ha logrado recuperar parte de su necesario perfil, pasó una de las crisis más graves de su breve historia cuando se le puso al frente a un juez incapaz, corrupto y dilapidador de recursos. Una persona forzada a dimitir a la mitad de su período, más por presiones de la sociedad civil y de gobiernos extranjeros que por la visión de nuestros políticos. La Fuerza Armada, que generalmente ha sido alabada por izquierdas y derechas debido a su rápida desmovilización y reducción de personal, ha resistido en el espíritu de cuerpo que le lleva a defender la impunidad de sus miembros, se ha negado a pedir perdón a las víctimas de los crímenes cometidos institucionalmente durante la guerra y ha mantenido como héroes a autores de masacres. El intento de recuperar prestigio a partir de su colaboración en misiones internacionales de paz y de su apoyo a la PNC en labores de represión de la delincuencia, no ocultan signos preocupantes. Su participación en la guerra de Irak, contra la voluntad muy mayoritaria del pueblo salvadoreño, es un ejemplo. Como lo es también la capacidad del Ministro de Defensa, militar en activo, de desobedecer impunemente órdenes de la Corte Suprema de Justicia. Por si esto fuera poco, un general retirado, acusado por la Comisión de la Verdad del asesinato de los jesuitas de la UCA, ha estado juramentando en los cuarteles a nuevos miembros de la ultraconservadora asociación de veteranos de guerra militares. Su leguaje claramente político y anticomunista deja patente la ambigüedad de una Fuerza Armada que se presume democrática.

El casi monopolio de la acción penal por parte de la Fiscalía General de la República, otra de las reformas tras los Acuerdos, se ha manifestado más como un instrumento de beneficio político para el poder que como un paso hacia la eficacia en la persecución del delito. El monopolio ha servido para impedir la persecución de criminales de lesa humanidad y para frenar denuncias de enriquecimiento ilícito contra funcionarios del Estado. Pero no para mejorar resultados. Ha impedido en la práctica la acción ciudadana frente a crímenes cometidos a lo largo de estos últimos años, y ha relegado a los jueces a un papel sumamente pasivo frente al delito.

En la paz, diáspora y exclusión

Hay poca paz, y la que hay, de poca calidad. Las instancias y reformas surgidas de los Acuerdos o no han funcionado, o se han vuelto paulatinamente ineficaces en la construcción de la paz. Y es esta misma situación de

Si las migraciones durante la guerra tendían a la búsqueda de nuevos ordenamientos vitales y sociales, hoy ha crecido el componente de aventura individual, anomia, riesgo vivido desde una rebeldía primitiva.

ineficacia institucional, de extendida violencia y criminalidad, y de falta de perspectivas económicas y sociales, la que ha mantenido algunas de las tendencias desintegradoras de la guerra. En efecto, durante la guerra los movimientos poblacionales fueron intensos y dieron pie a la disgregación masiva de la familia salvadoreña. Hoy somos un país en el que casi un tercio de la población vive fuera de las propias fronteras. Porque el fin de la guerra no terminó con la migración, sino que la aceleró. Regresaron los refugiados y exiliados políticos para que sus hijos emprendieran de nuevo el viaje hacia el exterior, esta vez sin protección internacional ni seguridad jurídica. Si las migraciones durante la guerra tendían a la búsqueda de nuevos ordenamientos vitales y sociales, hoy ha crecido el componente de aventura individual, anomia, riesgo vivido desde una rebeldía primitiva. Cuando las autoridades salvadoreñas se quejan de que los delincuentes deportados por Estados Unidos crean graves problemas internos, olvidan que son precisamente nuestros entes gubernamentales los que no pudieron integrar inicialmente a esos jóvenes dentro de nuestra propia sociedad. Y los que les han impulsado a una aventura que si bien lleva a una buena proporción de nuestra gente a un mejoramiento económico, también conlleva el riesgo del fracaso, del resentimiento y del odio a la sociedad que les ha hecho fracasar.

Las compensaciones sociales colectivas (históricamente escasas) disminuyeron a raíz de los procesos privatizadores. Lo poco que queda de ellas no ha sido suficiente como para aumentar las oportunidades locales y disminuir el flujo hacia el Norte. Y mucho menos para acrecentar la confianza en las instituciones salvadoreñas. Aun sabiendo y repitiendo propagandísticamente que “la educación es la solución”, la inversión en educación con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) no ha hecho más que bajar desde el año 2001. Desde una antigua comisión organizada para proponer insumos para la Reforma Educativa, hasta cualquiera de los muchos informes sobre desarrollo humano o sobre el combate a la violencia, la educación se presenta como un medio sumamente eficaz tanto para prevenir el delito como para aumentar las posibilidades de desarrollo humano. Y dado lo bajo de dicha inversión, los documentos elaborados insisten en la necesidad de aumentarla drásticamente y sistemáticamente. Pero las promesas no se cumplen ni se escuchan las advertencias. Aunque el Gobierno se defiende manifestando que todos los años el presupuesto educativo ha sido mayor que el anterior en la cantidad global, lo cierto es que la medición de la inversión en educación en relación al PIB se considera hoy, a nivel internacional, como el mejor indicador para medir los avances en inversión educativa. Y no sólo hemos bajado durante seis años, sino que en el concierto internacional somos uno de los países con peor relación entre la inversión en educación y el PIB.

La inversión en salud, con su pésimo sistema de doble vía, en el que los cotizantes al Seguro Social (aproximadamente el 20% de la población) tienen una atención muy superior a la de los no cotizantes (80% de la población), es un ejemplo claro de esta especie de racismo económico que sigue segregando a la mayoría de la población salvadoreña en el área de los servicios bási-

cos. Situación que se repite en el terreno de las pensiones, cuyo sistema no toma en cuenta ni el trabajo del 80% de los salvadoreños, ni su producción real de riqueza. Marginación que aumenta todavía más en el campo, donde, según datos del Banco Central de Reserva, la productividad por trabajador ha aumentado un 70% en los últimos 12 años, mientras los salarios siguen estáticos y son por mucho los más bajos a nivel nacional. En contraste, pese a que en el mismo período la productividad del sector secundario apenas ha aumentado y la del terciario ha disminuido, ambos cuentan con mayores prestaciones, incluido el derecho a pensión del que carecen los campesinos.

No es, pues, extraño que a falta de perspectivas políticas de cambio, un sector de la población se subleve con esa rebeldía primitiva que es la delincuencia, u opte por abandonar el país en busca de nuevas oportunidades, pero con una diferencia respecto al pasado: hoy los costos de las migraciones no se asumen socialmente. Todavía quedan en las colonias salvadoreñas en el exterior tendencias a la solidaridad, a la acogida y a la protección de los que llegan. Y los salvadoreños que durante un tiempo permanecieron en campamentos de refugiados mantienen hoy en sus comunidades rurales una paz social, una ausencia de delincuencia y una cohesión comunitaria envidiables. Pero cada vez más, en estos tiempos de paz, los costos de las migraciones han tendido a asumirse individualmente, con todos los riesgos de desarraigo, rechazo social y opción de “vida loca” violenta y marginal.

La corrupción del discurso, la lógica de la polarización

En medio de los nuevos y graves problemas de la posguerra, los discursos sobre la paz se han vuelto cada día más alucinantes y ajenos a la realidad. Desde la temprana Ley de Amnistía, un verdadero insulto para los pobres de este país, el lenguaje de paz se ha ido corrompiendo cada vez más. El famoso “perdón y olvido”, que más bien era una llamada al simple olvido como mecanismo de perdón, demostró desde sus primeros momentos que la sociedad salvadoreña no estaba reconciliada. Se reconciliaban de alguna manera las cúpulas de la sociedad, en sus brindis de sede diplomática, y en su diario interaccionar institucional, pero se condenaban al estatuto de basura de la historia a todas aquellas víctimas de delitos de lesa humanidad que habían perecido en una guerra que ni siquiera había sido de ellas. Ni una palabra institucional de solicitud de perdón en el discurso, ni la más mínima concesión a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, que pedían al menos la reparación moral de las víctimas.

Pero no sólo los sucesivos gobiernos han actuado de esta manera; los grandes medios de comunicación han contribuido también a perpetuar un tipo de cultura acrítica y no precisamente de paz. Una persona como María Julia Hernández, directora de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, recientemente fallecida, no mereció en las páginas de los periódicos locales de gran tirada más que unas muy pocas líneas. Extraordinaria defensora de los derechos humanos durante el tiempo del conflicto, protagonista en buena parte de la lucha social por la memoria histórica, impulsora de la construcción de un mural-memorial en el parque Cuscatlán (en el que figuran con nombre y apellido más de 20,000 víctimas civiles de la guerra), ha merecido menos espacio en los grandes medios que los animales del zoológico nacio-

Un partido que desee realmente echar adelante una política democrática requiere hoy una enorme claridad crítica y autocrítica, un desligamiento de dogmas y ortodoxias, un apego sistemático a la realidad y al análisis compartido de la misma, y una capacidad muy grande de dialogar con todas aquellas instituciones que desean cambios, que optan por la justicia, que se preocupan por el desarrollo humano e integral de nuestra sociedad.

nal que padecen enfermedad o muerte. Todo un símbolo de este lenguaje de paz tan desquiciado, que olvida a las víctimas, verdaderas protagonistas de la paz, y a quienes trabajaron por devolverles la dignidad y dar un mínimo de satisfacción a sus familiares. Entre tanto, a los firmantes de la paz, que pasaron once años peleando y violando derechos humanos, se les convoca a foros internacionales, se les ensalza y se les presenta como actores fundamentales de un proceso que sólo fue de ellos cuando no pudieron ya resistir el clamor de las víctimas y la presión de los defensores de los derechos humanos como María Julia Hernández. En este tema, la falta de visión de algunos países amigos es evidente, volviéndose con frecuencia cómplices de una sedicente y fementida paz.

Esta realidad de unos acuerdos de paz con deuda con la memoria histórica del país, sin eficacia social ni procesos de transformación estructural adecuados, ha tendido más a propiciar la polarización política que a la búsqueda de soluciones racionales. Los mismos funcionarios del Gobierno de ARENA lo reconocen en privado, y aceptan las recomendaciones de los consultores electorales, que insisten en que la polarización y la consiguiente radicalización del FMLN favorecen al partido en el Gobierno. Conscientes de ello, y partidarios de esta especie de dictadura monocolor arenera, los grandes medios y algunos sectores del gran capital salvadoreño abonan el terreno de la polarización. El FMLN, al insistir en convertirse en el protagonista único y auténtico de las reivindicaciones sociales, ha favorecido la tendencia y ha incidido peligrosamente en un empobrecimiento creciente del movimiento social. Y ha caído no pocas veces en la trampa de los poderes establecidos que desean un FMLN que despierte miedo en los sectores más desfavorecidos, dependientes de remesas o azotados por la violencia y delincuencia generalizadas.

Conclusiones

No es positivo el balance, y ello ha llevado a algunas personalidades a calificar de “show” las actividades organizadas en torno al decimoquinto aniversario de los Acuerdos. Países del primer mundo, que insisten con una enorme miopía en presentar como un éxito el proceso salvadoreño, participan, tal vez inconscientemente, en lo que parece un plan global de quienes dirigen la famosa “mano invisible”: dejar al tercer mundo en manos de unos poderes económicos que sólo funcionan bien con dictaduras o con democracias débiles y manipulables desde arriba, que no rinden cuentas a la ciudadanía y que mantienen sistemas de control político fuerte y poco democrático. Democracias débiles donde la propaganda populista sustituye al desarrollo real, donde se permite la corrupción a cambio de la colaboración con las preocupaciones del primer mundo (lucha contra la droga y libre comercio) y donde la formalidad democrática sustituye al Estado de Derecho. Países

dependientes, controlables y obedientes. Y en esta tendencia, la Unión Europea, a pesar de mantener un discurso alternativo al norteamericano, no da en la práctica señales de mayor diferencia.

Frente a ello, el mundo de la política adquiere una enorme responsabilidad. Un partido que desee realmente echar adelante una política democrática requiere hoy una enorme claridad crítica y autocrítica, un desligamiento de dogmas y ortodoxias, un apego sistemático a la realidad y al análisis compartido de la misma, y una capacidad muy grande de dialogar con todas aquellas instituciones que desean cambios, que optan por la justicia, que se preocupan por el desarrollo humano e integral de nuestra sociedad. Pasar de esta democracia débil y generadora de desigualdad, sin paz auténtica y sin desarrollo justo, a un Estado social y democrático de derecho, requiere esfuerzo, diálogo y capacidad de aunar esfuerzos.

Los pueblos, decíamos al inicio, son siempre mejores que sus gobiernos, y son por tanto capaces de vislumbrar quién tiene ofertas plausibles y auténticas de cambio. Pero hay que trabajar muy fino, y desde muchos ángulos, para convencer a la población de que lo que está por venir es fatal para la democracia y para el desarrollo: un estancamiento desastroso en la palabrería vana, la imagen calculada, la propaganda y la promoción de un individualismo feroz que mezcla en sus sueños de un futuro mejor la agresividad, el egoísmo y el éxito; sueños de opio para muchos y triunfos insolidarios para muy pocos. Y también convencer de lo contrario, que puede haber un futuro mejor. Y que la construcción de la solidaridad y del bienestar transita otras rutas: el camino del apego a la realidad, de la construcción de un bien común que incluya la opción por los más pobres como prioridad, del diálogo, de la honestidad democrática y de la capacidad de planificar el futuro desde intereses nacionales consensuados. Un camino que si se recorre paciente y persistentemente, puede conducirnos a una paz en la que la palabra y la realidad coincidan.

San Salvador, 2 de mayo de 2007.